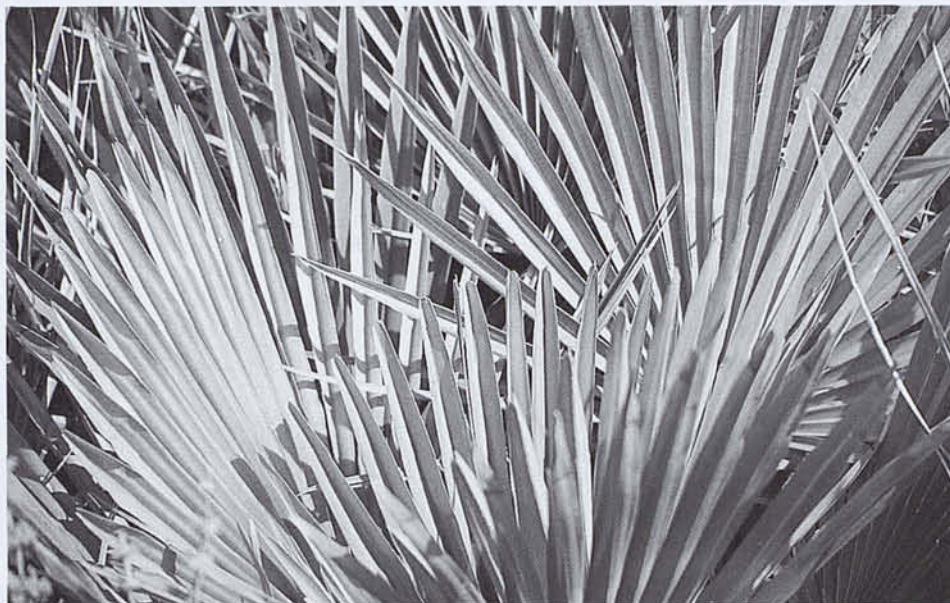


INCENDIOS FORESTALES, EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS EN EL PAÍS VALENCIANO



© M. COLOM



EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS, EL PAÍS VALENCIANO COMPARTE CON OTRAS ÁREAS MEDITERRÁNEAS EL AGRAVAMIENTO DE PROBLEMAS AMBIENTALES ESPECÍFICOS, CUYAS RAÍCES SON CLIMÁTICAS Y ANTRÓPICAS. SIN EMBARGO, TRES DE ESTOS PROBLEMAS ADQUIEREN LOCALMENTE UNA GRAVEDAD BASTANTE SUPERIOR A LA DE OTRAS REGIONES VECINAS Y COMPARTEN LA CARACTERÍSTICA DE SER DIFÍCILMENTE REVERSIBLES A ESCALA TEMPORAL HUMANA: NOS REFERIMOS A LOS INCENDIOS FORESTALES, LA EROSIÓN DEL SUELO Y LA CONTAMINACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LOS ACUÍFEROS.

XAVIER PUJOL GELI MIEMBRO DE ACCIÓN ECOLOGISTA GARZA. ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y EL ESTUDIO DE LA NATURALEZA EN EL PAÍS VALENCIANO

Los incendios forestales han merecido la atención preferente de los medios de comunicación, por su espectacularidad y por el tributo que, a menudo, cobran en vidas humanas. Las condiciones geográficas del País Valenciano permitirían la existencia de una cubierta vegetal arbórea importante, salvo

en las comarcas meridionales. La pluviosidad anual en la mayor parte del territorio (entre 350 y 600 mm) es suficiente, pero está condicionada por la fuerte desigualdad estacional típica de los climas mediterráneos: una fuerte sequía estival seguida de chubascos intensos en otoño.

La existencia de incendios forestales constituye, como ya es sabido, una característica de este tipo de climas; ahora bien, en los últimos 15 años, las cifras respecto al número de focos y a la superficie quemada se han disparado muy por encima de lo que permite la capacidad natural de regeneración. Hay que in-



© ELOI BONJOCH

sistir, pues, en el hecho de que los fuegos actuales no son, en modo alguno, un fenómeno *natural*. Desde 1978, se ha quemado una media de 30.000 ha anuales. Partiendo de la estimación –infravalorada– de que un 50% corresponde a superficie arbolada (el resto son zonas de matorros y arbustos) y teniendo en cuenta que, en estos momentos, el bosque cubre todavía el 13% del territorio valenciano –que en total tiene unos 23.000 km²–, podemos observar que, en un período equivalente al que estamos considerando, la cubierta vegetal arbórea desaparecerá casi por completo.

El incremento de medidas preventivas y de extinción ha sido espectacular. Se han multiplicado por 20 las inversiones económicas y los recursos humanos, lo cual no ha evitado resultados poco esperanzadores. El año 1994 ha batido los récords de superficie quemada.

Averiguar las causas de los incendios es fundamental para intervenir eficazmente en la prevención. Parece evidente que, sin descartar la existencia de otros factores, la gran mayoría tiene un origen antrópico e involuntario. El despostramiento del campo hace más difícil la detección y la extinción de los incendios en los momentos iniciales, cuando los equipos especializados pueden actuar con contundencia. El abandono de cultivos facilita que el fuego salte de unas manchas forestales a otras y, así, pequeños focos se convierten en frentes de llamas de decenas de kilómetros. Por otra parte, una creciente población urbana accede al bosque buscando un espacio de ocio que no encuentra en las ciudades.

La ignorancia y la falta de civismo tienen consecuencias catastróficas. Las numerosas campañas publicitarias dirigidas a concienciar a la población, no han logrado eliminar las negligencias, aunque sí han extendido entre los ciudadanos una preocupación abstracta por el medio natural. Por último, la progresiva sustitución de especies resistentes al fuego por otras más pirófitas (resinosas), con el fin de obtener una ilusoria rentabilidad comercial, ha dado origen a una masa forestal extraordinariamente combustible y frágil.

La opinión pública, sacudida por el impacto de los incendios, es proclive a aplaudir las intervenciones drásticas que tienden a prevenir los fuegos y a regenerar las montañas. En el punto de fragilidad que hemos alcanzado, no obstante, lo que menos necesita el territorio son actuaciones alocadas y de corta perspectiva. La limpieza del sotobosque o la apertura de cortafuegos, por ejemplo, son ineficaces a la hora de evitar la propagación de las llamas y, en cambio, dañan severamente la vegetación que pretenden proteger. La única prevención razonable es la que trata de evitar las causas de los incendios. Dado que la mayoría son de origen humano, existe cierto margen de esperanza para detener el proceso.

En particular, habría que olvidar por completo las limpiezas de sotobosque –ya que reducen la riqueza y la diversidad de los ecosistemas–, así como la apertura de nuevos caminos al tránsito rodado (conviene recordar que la mayoría de incendios tienen su chispa inicial

en el borde de las pistas). Por el contrario, la riqueza de un bosque –medida por su diversidad– implica automáticamente una menor tendencia a quemarse. Los cortafuegos, además de no evitar la propagación del incendio, estropean visualmente la montaña y favorecen la erosión. Sería necesario establecer una densa red de vigilancia, sobre el terreno, que cubriera el territorio y que formara el primer peldaño de los equipos de intervención rápida. Se han lanzado iniciativas en este sentido, con la colaboración de voluntarios, y sus resultados son bastante positivos. El coste económico no es nada desorbitado.

La dotación de medios de extinción modernos y de equipos de bomberos profesionales y especializados dista de haber alcanzado el nivel óptimo. A pesar de los incrementos presupuestarios, las carencias son todavía numerosas y, cuando los fuegos proliferan, se demuestran insuficientes. Los grupos ecologistas han solicitado reiteradamente (hasta el momento, sin resultados) la realización de auditorías rigurosas del dispositivo global de prevención y extinción, a la vista de la patente ineficacia demostrada en los últimos años.

Aun así, las medidas a largo plazo son la única esperanza de no estar permanentemente sometidos al peligro del fuego, máxime si las previsiones de cambio climático se van confirmando. Así, se necesitan campañas de formación de los ciudadanos profundas y diversificadas, empezando por la escuela y llegando a todos los sectores rurales. La política de desarrollo de las comarcas de montaña



© ELOI BONJOCH

debe *premiar* de algún modo la conservación y mejora de la biomasa. Sus habitantes deben ser los más firmemente interesados (en todos los sentidos, incluido el económico inmediato) en el mantenimiento de los bosques. Las tareas de protección y regeneración –no agresivas, con visión del conjunto del territorio y sin urgencias electoralistas– contienen una gran capacidad de crear puestos de trabajo.

El efecto más grave de los incendios, a largo plazo, es, sin duda alguna, la pérdida de suelo. La concentración de lluvias en episodios de gran intensidad durante el otoño –tras los incendios del verano–, provoca el arrastre de enormes cantidades de tierra superficial. La capa fértil donde se asienta la vegetación, corre aguas abajo. Al haber notables pendientes y estar el suelo poco consolidado en gran parte del territorio, las pérdidas son muy elevadas. Paisajes desnudos cruzados por profundos surcos y cárcavas son cada vez más frecuentes. En muchas zonas, los bancales abandonados, faltos de aprovechamiento agrícola, se deterioran con rapidez y contribuyen también a la pérdida de suelo.

En 1975, la FAO situaba ya la práctica totalidad del País Valenciano entre las zonas de riesgo muy alto de desertización. En parte, aquel riesgo se ha hecho realidad. Actualmente, el 29% del territorio valenciano presenta una erosión alta, muy alta o extrema; el 26%, moderada, y el 5%, leve. Al contrario que en el caso de los incendios, no hay medidas de recuperación posibles una vez que la erosión superficial se ha consumado. En

realidad, la política de prevención de incendios y la lucha contra la erosión son dos caras de la misma moneda.

La pérdida de la cubierta vegetal y la erosión dificultan la recarga de los acuíferos, ya que facilitan la escorrentía superficial y reducen la infiltración.

En la economía del País Valenciano, tienen un papel relevante la agricultura intensiva –de regadío– y el turismo. Ambos son sectores consumidores de agua. Agotadas las posibilidades de las corrientes superficiales, muchas comarcas tuvieron que recurrir, hace ya tiempo, a las aguas subterráneas. La agricultura intensiva de regadío hace un uso a menudo excesivo de abonos nitrogenados, con lo cual, por percolación, los acuíferos subterráneos resultan contaminados por nitratos. En los lugares donde el riego se realiza a partir de aguas subterráneas –ya bastante cargadas de nitratos–, se produce una contaminación acumulada. Muchas poblaciones que hace pocos años obtenían el agua para abastecimiento humano, con una buena calidad, de pozos locales, tienen que ir a buscarla actualmente a zonas más y más alejadas, ya que los acuíferos se han agotado o la calidad de la aguas es tan deficiente que no resulta apta para el consumo de la población. Con todo, en muchos municipios la escasez hace que el suministro continúe haciéndose a través de la red de agua, con unos contenidos intolerables de nitratos. Cerca de cien localidades consumen agua con un contenido de nitratos superior a los 50 mg/l, muy superior a las recomendaciones de la OMS. Muchos productos de huerta (elementos

frecuentes en la dieta local) presentan concentraciones de hasta 1.000 partes por millón.

El cambio de unos hábitos y de unas técnicas agrícolas muy arraigadas es, obviamente, difícil. Ahora bien, el campo valenciano ha estado históricamente al frente de las mejoras técnicas y demuestra una capacidad de adaptación a los requerimientos del mercado muy notable. Las nuevas exigencias de los consumidores en cuanto a unos alimentos más sanos, pueden influir positivamente en la reducción del uso de productos químicos. Análogamente, la aceptación de límites objetivos al crecimiento del sector turístico podrá aliviar, en un futuro, la presión sobre los recursos hídricos, sin olvidar una política de precios más realista que la actual, que no penaliza suficientemente el consumo excesivo.

En ciertas zonas costeras, el descenso del nivel freático provocado por el sobreconsumo ha provocado la intrusión de agua marina. Tanto la contaminación química como la salinización requieren períodos de decenas de años para que, en la hipótesis de una paralización del abuso actual –que, por otra parte, hay que reconocer que no se insinúa en absoluto–, pudieran recuperarse los acuíferos.

En conjunto, en el nivel de gravedad que hemos alcanzado, los problemas se entrelazan unos con otros y se potencian. Sólo con un enfoque global de la gestión del territorio y una clara adecuación de los usos a las potencialidades y a los recursos disponibles, se podrá invertir esta tendencia. ■